

Consideraciones Éticas en los Contratos de Representación Legal

Lcdo. Daniel Nina
fdnina@hotmail.com
Pro-Bono, Inc.



Objetivos del Curso



Entender lo complejo y sensible del asunto de la contratación legal de servicios profesionales



Conocer las disposiciones generales de las obligaciones y contratos.



Conocer las obligaciones éticas que regulan la conversacion



Conocer la jurisprudencia interpretativa



Aprender a qué hacer y qué no hacer

Preguntas fundacionales:

¿La libertad de contratación lo permite todo?

¿Debo participar en relaciones contractuales, como abogado/abogada, en las cuales el factor de ingresos económicos sea un motivo esencial?

¿Asistir en el acceso a la justicia, es parte esencial de mi responsabilidad profesional?

¿Mi trabajo, es continuamente supervisado y monitoreado?

¿Debo vivir de forma alerta, en paranoia profesional o cauteloso?

¿Debo documentar toda mi relación profesional?

Que elementos debo tomar en consideración para tener relaciones contractuales saludables

- Trabajar un contrato de servicios profesionales de forma completa.
- Cumplir con las obligaciones contractuales que se definieron en el contrato.
- Tener clausulas contractuales para modificar o enmendar el contrato.
- No modificar verbalmente el contrato.
- Conocer el Código Civil
- Conocer los Canones de Etica Profesional
- Conocer la Jurisprudencia
- Tomar cursos de etica profesional, relacionados a este tema de la contractación.
- Consultar con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sobre el tema.

Pasos: Paso 1 - Entrevista

Como pensar la entrevista a partir del Código de Etica Profesional (1970, los llamados Canones).

Conducir una entrevista clara, objetiva y distanciada, donde la necesidad económica no sea exclusivamente, el motivo de la contratación.

Separar las ideas “noveles” aunque de dudosa legalidad, de lo que realmente se puede hacer jurídicamente hablando.

Establecer un contrato donde se establezca con claridad las funciones legales a cumplir, el costo de las actividades legales que se realicen, y la razonabilidad entre el servicio y lo facturado.

Paso 2 – El contrato

Los modelos de contratos son variados. Cada uno representa el estilo de cada cual.

Lo importante es establecer con claridad cual es la prestación a ofrecer y su cumplimiento.

Lo otro importante es la relación entre el servicio y el costo. Esto va desde las formas de pago por adelantado (retainer) hasta la facturación por hora y por qué motivo.

El proceso de informar por que se facture, es de vital importancia. La documentación del trabajo realizado y notificado. Esto incluye la comunicación efectiva, continua y sustantiva.

Incorporar mecanismos de dilucidar controversias que surjan por los servicios profesionales

Modelo de contrato 1

- **Servicios Legales:**
Desahucio e Incumplimiento de Contrato
(TPI San Lorenzo, Sala Superior en Caguas)

- **Cláusulas Generales:**

1. Nina Estrella –Abogados, ofrecerá servicios legales por vía del Lcdo. Francis Daniel Nina Estrella (RUA 8363, Colegio de Abogados 9615, Mediador 0002) en Puerto Rico; este podrá solicitar ayuda a sus asistentes en su oficina, o sub-contratar servicios legales adicionales.
2. El presente se da para cumplir con los objetivos descritos anteriormente en negrilla, en particular representación legal tanto en el foro administrativo (de haber alguno o de ser necesario), judicial o por vía de la negociación.

Modelo de Contrato 2



El presente contrato de servicios profesionales garantiza una relación profesional de forma diligente en el ámbito de los servicios legales. No garantiza que el caso se resuelva de una forma en particular. Se reconoce que los asuntos legales pueden tener una diversidad de soluciones y que los mismos tardan tiempo en resolverse.



Es de vital importancia, y es consideración para no continuar la relación profesional, que el cliente se mantengan en comunicación con Nina Estrella – Abogados, en todo momento. Nina Estrella -Abogados mantendrá comunicación constante con la parte e informará de todas las gestiones que se realicen.



De haber algún conflicto entre las partes, y previo a la utilización de cualquier otra metodología, las partes deberán facilitar un diálogo o mediar este conflicto.



Paso 3 – Reparar el conflicto

- Los conflictos contractuales que surgen, en su mayoría se dan por cobro de dinero y no cumplimiento de la prestación acordada.
- El conflicto escala, porque la representación legal no responde y explica con claridad los problemas o evade la resolución.
- El conflicto se expande cuando se deja de actuar conforme a contrato. Es decir, surgen los incumplimientos contractuales.
- Se rompe la comunicación, y la falta de diligencia en la representación legal hacia la parte, reina, se impone.
- La parte (el llamado cliente) desconoce sus derechos, pero el asesoramiento primario de cualquier otra representación legal, basado en los Canones, es aconsejar que la parte tiene un derecho a acudir al Tribunal Supremo.



Paso 4 - La queja, por los servicios profesionales [insatisfactorios]

- Cuando la persona llamada cliente, ha recibido asesoría por parte de una tercera parte, y/o ha acudido directamente al Tribunal Supremo, eventualmente se radica una queja (primer paso normativo).
- La correcta documentación de las fases 1 a la 3 puede asistir a mitigar el proceso de una queja ante el Tribunal Supremo. La incorrecta documentación puede afectar el proceso adversamente.
- El manejo sensible de la situación, ante el poder inherente del Tribunal Supremo, empeora la cosa.
- Una violación crasa a las obligaciones contractuales, o un mal manejo de comunicaciones ante el Tribunal Supremo, o una línea defensiva no conducente a reducir la tensión puede escalar a querella.
- Mi impresión de las querellas (cuando el proceso se torna en “educativo/remediativo” pero adversative ante el Tribunal Supremo, no es positivo. La defensa confrontacional, no ha sido la lógica adecuada.

Consideraciones Eticas (el Código de 1970)

1

Canon 1. Responsabilidad del abogado de laborar por que toda persona tenga representación legal adecuada: Servicios legales a personas indigentes Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal.

2

En la consecución de este objetivo el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas.

3

También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos.

Canon 18

- Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
- Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
- Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. No debe tampoco ceder en el cumplimiento de su deber por temor a perder el favor judicial ni la estimación popular. No obstante, un abogado puede asumir cualquier representación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia.

Canon 24

- La fijación de honorarios profesionales debe regirse siempre por el principio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro. Al fijar el valor de los honorarios, deben considerarse los siguientes factores:
 - (1) el tiempo y trabajo requeridos, la novedad y dificultad de las Código de Ética Profesional (1970) 15 cuestiones envueltas y la habilidad que requiere conducir propiamente el caso;
 - (2) si el aceptar la representación del caso en cuestión ha de impedir al abogado que se haga cargo de otros casos que probablemente han de surgir del mismo asunto, y en los cuales existe una razonable expectativa de que de lo contrario sus servicios serán solicitados o que tal representación implique la pérdida de otros asuntos extraños al caso en cuestión o el antagonismo con otros clientes;
 - (3) los honorarios que acostumbradamente se cobran en el distrito judicial por servicios similares;
 - (4) la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios que ha de derivar el cliente de los servicios del abogado;
 - (5) la contingencia o certeza de la compensación; y
 - (6) la naturaleza de la gestión profesional, si es puramente casual o para un cliente constante.

Canon 24 (cont.)

- Es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito.
- El abogado no debe estimar sus consejos y servicios en más ni en menos de lo que realmente valen. Al aceptar la representación profesional de un cliente debe considerar que le debe a éste un máximo de esfuerzo profesional en la medida de su talento y preparación. No debe aceptar retribuciones mínimas con la idea preconcebida de rendir esfuerzos mínimos.
- La aptitud de un cliente para pagar no puede justificar que se cobre en exceso del valor de los servicios prestados, pero su pobreza puede ser tal que requiera el que se le cobre menos y aun nada. Solicitudes razonables de servicios de parte de colegas, de sus viudas y huérfanos, sin medios amplios de fortuna, deben recibir especial y bondadosa consideración.
- Un abogado debe exigir el pago de honorarios contingentes sólo en aquellas ocasiones en que dichos honorarios sean beneficiosos para su cliente, o cuando el cliente lo prefiera así después de haber sido debidamente advertido de las consecuencias.
- Con el propósito de que los clientes estén protegidos contra cargos injustos, los honorarios contingentes deben ser razonables y estar siempre sujetos a la aprobación del tribunal, en aquellos casos en que la intervención judicial sea requerida por ley o por alguna de las partes en el litigio. Es altamente impropio de un abogado el cobrar honorarios contingentes en un caso criminal. Código de Ética Profesional (1970) 16
- El abogado debe acatar los deseos de un cliente ansioso de transigir su pleito.
- Los honorarios concedidos por un tribunal son para beneficio del cliente y no debe el abogado reclamarlos para sí o renunciarlos sin autorización expresa del cliente.

Canon 25

- Las controversias con los clientes con respecto a la compensación deben evitarse por el abogado en todo lo que sea compatible con el respeto a sí mismo y con el derecho que tenga a recibir una compensación razonable por los servicios prestados. Solamente deben establecerse demandas contra los clientes para evitar injusticias, imposiciones o fraudes.

El Código Civil

- Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §3371, establece que “[e]l contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.”
- El Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §3372, lee: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”
- Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Sec. 3375: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la Buena fe, al uso y a la ley”.
- Artículo 1213. — Requisitos del contrato. (31 L.P.R.A. § 3391) No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: (1) Consentimiento de los contratantes. (2) Objeto cierto que sea materia del contrato. (3) Causa de la obligación que se establezca.



Las Obligaciones terminan:

- Artículo 1110. — Cómo se extinguen las obligaciones. (31 L.P.R.A. § 3151) Las obligaciones se extinguen: “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930 según enmendado Rev. 05 de marzo de 2020 www.ogp.pr.gov Página 207 de 350
 - Por el pago o cumplimiento. Por la pérdida de la cosa debida.
 - Por la condonación de la deuda.
 - Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor.
 - Por la compensación.
 - Por la novación.
-

Las Obligaciones contractuales terminan:

- Artículo 1077. — Derecho de resolver obligaciones recíprocas. (31 L.P.R.A. § 3052) La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los Artículos 1247 y 1250, y las disposiciones de la Ley Hipotecaria.

La jurisprudencia sobre contratos dice:

- Configuración de los elementos constitutivos del contrato: **Rodríguez Ramos vs. ELA**, 2014 TSPR 32 (2014).
- Consentimiento: **Aranzamendi v. Loubriel**, 5 D.P.R 65 (1940).
- Cumplimiento con lo pactado: **Prods. Tommy Muñiz v. COPAN** 113 D.P.R 517, 526 (1982).
- Interpretación literal de las cláusulas: **Burgos López Et. Al vs. Condado Plaza** 2015 TSPR 16 (2015).
- En general sobre cumplimiento de los contratos y los incumplimientos: **Alcalde de Gobierno Municipal de Guayama v. ELA**, 2015 TSPR 16; **ELA v. Liborio Caro y otros**, 2012 TSPR 64; **Méndez Acevedo y otros v. Nieves Rivera**, 2010 TSPR 105; **Buckeye v. Cardegna and others**, 54 US 440 (2006).

Contratos de representación legal [Blanco Matos v. Colón Mulero, 2018 TSPR 102]

- El Tribunal Supremo ha reiterado en todos los casos sobre la materia lo siguiente:
“ Este Tribunal ha reiterado que el Contrato de Servicios Legales es un contrato *sui generis*. *In re Vélez Lugo*, 180 DPR 987, 995 (2011). Distinto a cualquier Contrato de Arrendamiento de Servicios, el de servicios legales está supeditado a un sinnúmero de consideraciones éticas que son intrínsecas a la profesión legal. *In re Acevedo Álvarez*, 178 DPR 685, 690 (2010); *In re Delannoy Solé*, 172 DPR 95, 101-102 (2007). Estas consideraciones éticas tienen el efecto de limitar la autonomía de la voluntad de los contratantes en este tipo de contrato. *Nassar Rizek v. Hernández*, 123 DPR 360, 370 (1989). Particularmente, la fijación de honorarios de abogado es uno de los aspectos de los Contratos de Servicios Legales directamente afectados por consideraciones éticas. Véase: Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 24; *In re Díaz Lamoutte*, 106 DPR 450, 455 (1977)”.

En cuanto a facturación (contingente)[Blanco Matos]

- La Ley Núm. 9 de 8 de agosto de 1974, 4 LPRA sec. 742, impone límites porcentuales a la facultad del abogado de cobrar honorarios contingentes; específicamente, en acciones de daños y perjuicios. En lo atinente a la controversia que nos ocupa, esta dispone que:

Ningún abogado cobrará honorarios de naturaleza contingente en acciones de daños y perjuicios una cantidad que, en cualquier concepto, exceda del veinticinco por ciento (25%) del producto final de la sentencia, transacción o convenio si el cliente es menor de edad o incapacitado mental o del treinta y tres por ciento (33%) del producto final de la sentencia, transacción o convenio si se trata de cualquier otro cliente. No obstante, lo anteriormente dispuesto, cuando se trate de clientes que sean menores de edad o incapacitados mentales, el tribunal podrá autorizar el cobro de honorarios contingentes hasta un treinta y tres por ciento (33%) del producto final de la sentencia, transacción o convenio si el abogado así lo solicita y presenta justificación para ello. 4 LPRA sec. 742.

- El precitado estatuto prohíbe expresamente el cobro de una cantidad en exceso de lo allí autorizado. Asimismo, impone a los tribunales la obligación de velar por su estricto cumplimiento al disponer que su violación será causa para una acción disciplinaria ante este Tribunal y que “[t]odo contrato o convenio otorgado con el fin de evadir la prohibición [...] será nulo y no tendrá valor alguno”. 4 LPRA sec. 742. (Énfasis suplido). Véase además, *In re Acevedo Álvarez*, supra, pág. 700.



El rol de la fiscalización del Tribunal Supremo [In re Pellot, 2020 TSPR 029]

- La potestad disciplinaria de este Tribunal va dirigida a asegurarnos que los llamados a este ministerio ejemplifiquen con su conducta los valores y principios deontológicos acrisolados en los Cánones del Código de Ética I Profesional. Y es que el abogado al asumir su oficio se compromete a seguir las pautas de comportamiento que garantizan el fiel cumplimiento de la función social que conlleva el ejercicio de la profesión legal. El propósito de la función disciplinaria de este Tribunal no es entonces castigar al abogado, sino por el contrario, proteger a la comunidad y a la propia profesión. Véase, entre otros, In re IAbela, 14 DPR 748, 749 (1908); In re Tormes, 30 DPR 267 (1922); In re Liceaga, 82 DPR 252, 253 (1961); In re ISepúlveda, Casiano, 155 DPR 193, 207 (2001), In re López IGonzález, 171 DPR 567 (2007) . Véase, además, Angela Aparisi Iralles, Ética y deontología para juristas, EUNSA, 2016, ICap. 3.

Pactar por contrato honorarios – razonabilidad – [In re Rodríguez Mecado, 2005 TSPR 144]

- De otro lado, el abogado tiene derecho a recibir una compensación razonable por los servicios que rinde a sus clientes. *Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas*, ante; *Rodríguez v. Ward*, 74 D.P.R. 880 (1953). Conforme a ello, cabe señalar que en ausencia de un pacto expreso sobre la cuantía que debe ser cobrada por los servicios CP-2002-7 14 profesionales, aplica el Artículo 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4118, el cual establece, en lo pertinente:

... En cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la remuneración de los mismos, a lo convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ... el importe razonable de dichos servicios.

Conforme a la referida disposición estatutaria, en nuestro ordenamiento se reconoce la máxima legal quantum meruit que significa: “[t]anto como se merece”; es el derecho a reclamar el valor razonable de los servicios prestados. I. Rivera García, *Diccionarios de Términos Jurídicos*, 2da ed. rev. New Hampshire, Ed. Equity Publishing Corp., pág. 425; *Rodríguez v. Ward*, 74 D.P.R. 880 (1953); *Zequeira v. C.R.U.V.*, 83 D.P.R. 878 (1961).



Honorarios excesivos [Cont. In re Rodríguez Mercado]

- Resolvemos, además, que los honorarios cobrados por la licenciada Rodríguez Mercado son excesivos. La querellada no ha sometido documento alguno que sostenga la razonabilidad de dichos honorarios; tememos, además, que ésta no completó su trabajo ya que nunca hizo las gestiones para traspasar los bienes inmuebles a nombre del menor.

¿Qué hacer o no hacer?

- No conversar, explicar y aclarar a su cliente, los terminos monetarios del contrato.
- Pese a todo, y en el concepto de acceso a la justicia, facturación por encima de \$150.00 la hora, comienza a ser sospechosa en Puerto Rico.
- Casos que no sean de daños, donde se imponen relaciones porcentuales de cobro, están todas en entredicho (Blanco, Ibid. y Pellot, Ibid.).
- No ser transparente e informativo en los servicios prestados. Informar, informar e informar. Sobre todo, documentar el ejercicio de información.

Conclusión y Cierre

- ¿Preguntas?
- ¡Gracias!